



**JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE  
MEDELLÍN, DICIEMBRE DIECISEIS DE DOS MIL VEINTE.**

PROCESO:	ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTE:	RICARDO ANDRES ALARCÓN SAAVEDRA.
ACCIONADA:	PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S.
RADICADO:	0500140030052020049200
ASUNTO:	NO AVOCA EL CONOCIMIENTO DE TUTELA POR COMPETENCIA

Es ésta la Acción de Tutela, interpuesta por el señor **RICARDO ANDRÉS ALARCÓN SAAVEDRA**, en contra de la accionada **PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S.**, la que fuera recibida aquí en la fecha por el correo institucional del despacho.

Analizada la solicitud que antecede, advierte la suscrita Juez Constitucional que carece de **COMPETENCIA**, para asumir el conocimiento de la presente solicitud de tutela, en consideración de lo dispuesto por Decreto 1983 de 2017, por causa del factor territorial.

Es así, como a los Jueces Municipales nos serán repartidas para conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela, que se incoen contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares.

Siendo entonces examinada la situación concreta expuesta en la demanda, ha de tenerse en cuenta que la **ACCIÓN DE TUTELA** propuesta por el señor **RICARDO ANDRÉS ALARCÓN SAAVEDRA**, donde se convoca como sujeto pasivo a la **PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S.**, con domicilio en **BOGOTÁ, D.C.**, como se desprende de la dirección indicada por el propio accionante para las notificaciones de la parte accionada, por la omisión que se le atribuye, efectivamente corresponde a un **JUEZ MUNICIPAL**. Sin embargo, el accionante, se ubica o tiene su domicilio en el **MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA**, y por tal razón es el lugar donde la acción u omisión se traduce en afectación para los intereses de la parte accionante. Es en esa municipalidad, por ende, en donde al accionante le están ocasionando la supuesta vulneración, donde, según las afirmaciones contenidas en la solicitud de tutela, adquiere materialidad la violación o amenaza de los derechos fundamentales de la parte actora, es decir, en el sitio donde se proyecta la omisión reprochable constitucionalmente.

Una cosa es el domicilio o sede de una determinada accionada, en este

caso, BOGOTÁ, donde está radicada la presunta autora del lesionamiento de derechos fundamentales de la parte accionante y eventualmente el lugar en el que esa parte demandada actúa o se abstiene de actuar, y otra diferente el lugar en el que su acción u omisión produce efectos de vulneración de derechos constitucionales fundamentales para el(a) actor(a), el lugar en el que esos procederes se materializan o producen el efecto lesivo de los derechos fundamentales. Sobre el particular debe decirse que es en este último lugar en el que realmente ocurre la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud, y al que se refiere el inc. 1° del Art. 37 del Decreto 2591 de 1991; Decreto 1069 de 2015, ahora esos dos lugares perfectamente pueden o no coincidir, pero es aquél, el determinante de la competencia por el factor territorial, para el conocimiento de la solicitud de tutela en primera instancia, donde se concretan las actuaciones u omisiones del sujeto accionado, tocando la esfera de los derechos fundamentales.

Cierto es que, en este caso por estar dirigida la acción de tutela contra un órgano de carácter privado, la competencia para conocer del asunto por la calidad de la accionada –se repite– corresponde a un JUEZ MUNICIPAL; pero también viene de lo dicho con meridiana claridad, que ese JUEZ MUNICIPAL no es de los que conforman el CIRCUITO DE MEDELLÍN, porque, está dicho, se debe ubicar geográficamente en el MUNICIPIO DE BELLO(ANT.), sitio que corresponde al domicilio del actor y donde se materializan los hechos lesivos, porque es allí donde corresponde al domicilio del accionante quien deprecia la violación, según se desprende del escrito de tutela y los anexos, en mérito de ello, se impone consiguientemente, la aplicación del Art. 1° del Decreto 1983 de 2017, parágrafo 1. Y aunque el accionante domiciliado en BELLO, escogió esta ciudad, es del caso considerar que no es éste el lugar del domicilio de él, ni el de la parte accionada, o de otro factor que confiera competencia a esta Juez Constitucional.

Ahora bien, la Corte Constitucional en el auto No. 124 proferido el 25 de marzo de 2009, concluyó y precisó la jurisprudencia constitucional acerca de los conflictos de competencia en las acciones de tutela, indicando las siguientes reglas: “(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el decreto 1382 de 2000, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso. (iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación)...(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente...13.- Con la anterior argumentación, la Corte no desconoce la validez del decreto 1382 de 2000, simplemente le está otorgando el alcance que debe tener. Se reconoce que las normas de reparto del

*mencionado acto administrativo deben ser regidas obligatoriamente por las Oficinas de Apoyo Judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario...*”(cursiva y subrayas nuestras).

Luego el despacho no es competente por el factor territorial para conocer de la presente tutela, por tanto, el Juzgado debe proceder a remitir la solicitud de tutela comentada a la autoridad judicial que considera competente, en este caso concreto ante los Señores(as) JUECES MUNICIPALES DE BELLO - ANTIOQUIA (REPARTO). Lo resuelto se le hará saber al accionante, por un medio eficaz.

En mérito de lo dicho, el **JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO. - NO AVOCAR** el conocimiento de la Acción de Tutela que dedujo el señor **RICARDO ANDRÉS ALARCÓN SAAVEDRA**, en contra de la accionada **PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S.**, por carecer este despacho de competencia, según lo argumentado en la parte expositiva.

**SEGUNDO. - REMITIR** la solicitud con sus anexos, ante los Señores(as) JUECES MUNICIPALES DE BELLO - ANTIOQUIA (REPARTO), por competencia, a través de la dependencia judicial competente.

**TERCERO.-COMUNICAR** lo anterior a la accionante, por un medio eficaz.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

LA JUEZA,



Sonia Patricia Mejía  
SONIA PATRICIA MEJÍA.